

**CONVENIO IBEROAMERICANO DE COOPERACION SOBRE
INVESTIGACION, ASEGURAMIENTO Y OBTENCION DE PRUEBA EN
MATERIA DE CIBERDELINCUENCIA**

Los Estados miembros de la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos (COMJIB), en adelante denominados las Partes:

VISTO el artículo 3º, apartado c), del Tratado constitutivo de la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos del 7 de octubre de 1992;

RECORDANDO los valiosos intercambios técnicos y político criminales llevados a cabo en el marco del Seminario Iberoamericano sobre Cibercrimen desarrollado los días 6 y 7 de septiembre de 2011 en la ciudad de Buenos Aires; en la reunión del Grupo de trabajo sobre "Delincuencia Organizada Transnacional y Cooperación Jurídica Internacional" del 8 y 9 de septiembre de 2011 en la misma ciudad; en los talleres convocados en Montevideo del día 17 al 19 de septiembre de 2012, y en Madrid del 4 al 6 de febrero de 2013; en la reunión de coordinadores llevada a cabo en Bogotá el 4 y 5 de Marzo y en el taller desarrollado en Lima los días 24, 25 y 26 de junio de 2013.

TENIENDO PRESENTE que en la Comisión Delegada de la COMJIB celebrada en Río de Janeiro el día 23 de marzo de 2012 se aprobó una importante "Declaración sobre el cibercrimen" en la que se acordó: "respaldar los primeros pasos que se han dado en la línea de lucha contra la delincuencia organizada para iniciar el debate sobre la elaboración y firma de un documento internacional iberoamericano, capaz de dar respuesta a las necesidades arriba referidas, e impulsar la modificación de las legislaciones penales de manera armonizada". Razón por la cual se dictaron unas líneas generales "con la finalidad de concretar un borrador de Convenio Iberoamericano para regular el Cibercrimen".

ATENDIENDO a que en la Plenaria llevada a cabo en Viña del Mar se acordó, sobre el borrador aportado, elaborar un Convenio Iberoamericano sobre cooperación, prueba, jurisdicción y competencia en materia de cibercrimen, así como una Recomendación que albergaría los principios relativos a los aspectos sustantivos que deberían encontrar acomodo en las legislaciones nacionales.

SIGNIFICANDO que en Viña del Mar se acordó, también, convocar un taller para terminar "de definir el contenido final" de los dos documentos acabados de referir, con el objetivo de elevar, para su firma, los dichos textos a la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, celebrada en Panamá en octubre del 2013, lo que no ha sido posible.

CONSIDERANDO, que las legislaciones procesales iberoamericanas deben avanzar de manera coordinada para lograr un desarrollo suficiente que permita afrontar con garantías la lucha contra la cibercriminalidad.

CONVENCIDOS de que todos los esfuerzos para la prevención y lucha contra el cibercrimen son necesarios

ENTENDIENDO que el presente instrumento debe estar abierto a futuros desarrollos y ampliaciones a nuevos delitos y mecanismos de cooperación.

MANIFESTANDO la voluntad de que el presente instrumento resulte compatible con otros análogos, así como con reconocidas buenas prácticas en el ámbito internacional,

MANTENIENDO el propósito de establecer criterios mínimos y comunes en la prevención y lucha contra el cibercrimen, y sin menoscabar los avances alcanzados en los respectivos ordenamientos jurídicos así como de las obligaciones internacionalmente asumidas por cada Estado.

Han convenido en lo siguiente:

Artículo 1

OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN

El presente convenio tiene por objeto reforzar la cooperación mutua de las Partes para la adopción de medidas de aseguramiento y obtención de pruebas para la lucha contra la cibercriminalidad.

Artículo 2

DEFINICIONES

A efectos del presente Convenio:

1. Por "cibercriminalidad" se entiende cualquier forma de criminalidad ejecutada en el ámbito de interacción social definido por el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación.
2. Por "incautación y depósito de sistemas informáticos o soportes de almacenamiento de datos" se entiende su ocupación física y su aseguramiento por las autoridades.

3. Por “sellado, precinto y prohibición de uso de sistemas informáticos o soportes de almacenamiento de datos” se entiende su bloqueo absoluto o la imposibilidad de su utilización, incluida la congelación de sistemas virtuales.
4. Por “requerimiento de preservación inmediata de datos que se hallan en poder de terceros” se entiende la imposición a particulares o a entidades públicas o privadas del deber de conservación íntegra de información digital que obre en su poder o sobre la que tenga facultades de disposición.
5. Por “copia de datos” se entiende la reproducción exacta de la información digital recolectada por particulares, entidades públicas o privadas.
6. Por “intervención de comunicaciones a través de las tecnologías de la información y comunicación” se entiende la captación en tiempo real del contenido de dichas comunicaciones sin interrupción de las mismas, así como de los datos de tráfico anexos.
7. Por “obtención de datos de tráfico” se entiende la captación de las informaciones relativas al origen, destino, ruta, hora, fecha, tamaño y duración de una comunicación electrónica en tiempo real y con ocasión de su realización.
8. Por “acceso a sistemas de información” se entiende la entrada a dichos sistemas, incluyendo los accesos remotos.
9. Por “acceso a la información contenida en un dispositivo que permita el almacenamiento de datos” se entiende la extracción de la información contenida en dicho dispositivo.
10. Por “entrega de datos y archivos informáticos” se entiende la transferencia de informaciones y documentos en formato electrónico que obren en poder de particulares, entidades públicas o privadas.

Artículo 3

PRINCIPIO DE COOPERACIÓN MUTUA

1. En el ámbito de aplicación del presente Convenio las Partes se comprometen a cumplir las solicitudes de cooperación formuladas por otra u otras Partes.
2. La Parte requerida podrá negarse a satisfacer, total o parcialmente, la solicitud de cooperación cuando:
 - a) Su realización pueda causar grave perjuicio a una investigación o enjuiciamiento en curso.
 - b) Los hechos que fundamentan la solicitud de cooperación ya hubieran sido

enjuiciados o archivados de forma definitiva en esta Parte.

- c) El cumplimiento de la actividad de cooperación sea contrario a su derecho interno.
- d) Entienda que se encuentran afectados su soberanía, seguridad, orden público u otro interés esencial.
- e) La solicitud se refiera a una infracción que el estado requerido considera de naturaleza política o vinculada a una información de naturaleza política.
- f) La conducta perseguida no esté contemplada como infracción penal en su ordenamiento.
- g) Se infrinjan los términos del presente Convenio.

3. La Parte requerida deberá motivar razonadamente su negativa a cumplir la solicitud de cooperación. Esta respuesta podrá realizarse de modo reservado o, en su caso, limitado, cuando se considere que una explicación más detallada podría poner en grave riesgo la investigación o el enjuiciamiento en curso, sin perjuicio de que la justificación se complete con posterioridad.

Artículo 4

RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS

En la solicitud o ejecución de actividades de cooperación, las Partes serán absolutamente respetuosos con los derechos fundamentales de las personas en los términos previstos en los Tratados y Convenios Internacionales sobre Derechos Humanos.

Artículo 5

ACTIVIDADES DE COOPERACIÓN

1. Cuando, en el curso de la investigación o enjuiciamiento de un delito comprendido en el ámbito de aplicación de este Convenio, las autoridades competentes de una Parte estimen necesaria la adopción de alguna de las medidas de aseguramiento de prueba o la práctica de alguna de las diligencias de investigación enumeradas en los artículos 6 y 7 dentro del territorio de otra Parte, podrán solicitar a las autoridades competentes de este último su realización de acuerdo con el procedimiento establecido en el presente Convenio.
2. Las Partes se comprometen a impulsar las iniciativas legislativas y aquellas otras que fueran necesarias para regular en sus ordenamientos internos las actuaciones mencionadas en los artículos 6 y 7.

Artículo 6

MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO

Sin perjuicio de cualesquiera otras medidas de aseguramiento que pudieran contribuir a la persecución efectiva de los delitos comprendidos dentro del ámbito de aplicación de este Convenio, se podrán solicitar las siguientes medidas específicas:

1. La incautación y depósito de sistemas informáticos o soportes de almacenamiento de datos.
2. El sellado, precinto y prohibición de uso de sistemas informáticos o soportes de almacenamiento de datos.
3. El requerimiento de preservación inmediata de datos que se hallan en poder de terceros.
4. La copia de datos.

Artículo 7

DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN

Sin perjuicio de cualesquiera otras diligencias de investigación que pudieran contribuir a la persecución efectiva de los delitos comprendidos dentro del ámbito de aplicación de este Convenio, se podrán solicitar las siguientes diligencias específicas:

1. La intervención de comunicaciones a través de las tecnologías de la información y comunicación.
2. La obtención de datos de tráfico.
3. El acceso a sistemas de información.
4. Acceso a la información contenida en un dispositivo que permita el almacenamiento de datos.
5. La entrega de datos y archivos informáticos.

Artículo 8

AUTORIDADES CENTRALES

1. Cada una de las Partes designará una Autoridad Central que canalizará las solicitudes de cooperación.
2. En particular, corresponderá a la Autoridad Central:
 - a) Recibir y verificar la regularidad formal y la legalidad de las solicitudes de cooperación de otras Partes, y dirigirlas a las autoridades competentes para su cumplimiento dentro del Estado.
 - b) Recibir y verificar la regularidad formal y legalidad de las solicitudes de cooperación nacionales, y remitirlas a la Autoridad Central de la Parte de cumplimiento correspondiente.
3. Las Partes designarán y garantizarán el funcionamiento continuado de al menos un punto de contacto disponible todos los días del año y durante las 24 horas del día.

Artículo 9

SOLICITUDES DE COOPERACIÓN

1. Las solicitudes de cooperación deberán contener los siguientes extremos:
 - a) Identificación de la autoridad que presenta la solicitud y la Parte destinataria de la misma.
 - b) Descripción somera de los hechos que están siendo investigados o sometidos a enjuiciamiento.
 - c) La eventual calificación jurídica con expresión de los preceptos legales que pudieren haber sido infringidos conforme a la legislación de la Parte requirente.
 - d) La medida de aseguramiento o diligencia de investigación que se solicita y su justificación.
 - e) Si fuera preciso, las condiciones concretas en que deba llevarse a cabo la medida de aseguramiento o diligencia de investigación solicitada, al objeto de que tenga validez en la Parte requirente.
2. Las comunicaciones se llevarán a cabo a través de cualquier medio seguro que deje constancia de su envío y recepción íntegra y en el idioma de la Parte requerida.
3. Por razones de urgencia el solicitante podrá dirigirse directamente a los puntos de

contacto formalizando una solicitud abreviada que deberá completarse en el improrrogable plazo de 48 horas.

4. Con carácter previo a la formalización de la solicitud la autoridad requirente podrá elevar por el cauce de su Autoridad Central consultas a la Parte requerida sobre la existencia de requisitos específicos con arreglo a su derecho interno para el cumplimiento de la solicitud.

5. Las Partes podrán servirse de cualquier canal de intercambio de información para facilitar la cooperación en el marco de este Convenio, en particular de IberRed.

Artículo 10

PROCEDIMIENTO PARA LA TRAMITACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE COOPERACIÓN

1. En orden a verificar la regularidad formal y legalidad de la solicitud de cooperación, las Autoridades Centrales atenderán al cumplimiento de los requisitos materiales y procesales establecidos en el presente Convenio, así como a las normas de derecho interno.

2. La Autoridad Central de la Parte requerida verificará la regularidad formal y legalidad de la solicitud y adoptará alguna de las siguientes decisiones:

a) Rechazar, total o parcialmente, la solicitud motivadamente cuando concurra un defecto insubsanable o cuando por cualquier otra causa no fuera posible su cumplimiento según este Convenio o el ordenamiento jurídico de la Parte requerida.

b) Devolver la solicitud motivadamente cuando concurra un defecto subsanable, otorgando al solicitante un plazo de corrección.

c) Admitir la solicitud remitiéndola a la autoridad competente para su ejecución.

d) Admitir la solicitud de modo condicionado a que:

(i) Se preserve la confidencialidad de la información o actuaciones interesadas, si la solicitud no puede ser atendida sin esta reserva.

(ii) No se haga uso de los resultados obtenidos en investigaciones o procedimientos distintos de los indicados en la solicitud.

3. Si el requirente no acepta las condiciones de cumplimiento, la Autoridad Central de la Parte requerida podrá rechazar la solicitud.

4. Los resultados obtenidos, si los hubiere, serán remitidos a la Parte requirente a

través de su Autoridad Central. Si en este momento fueran conocidas las condiciones de confidencialidad y exclusividad de uso contempladas en el apartado 2.d) de este precepto se informará a la Autoridad Central requirente, a fin de que manifieste si las acepta. No siendo así, la Autoridad Central de la Parte requerida podrá negarse a remitir los resultados.

5. El Estado requerido podrá solicitar que se le informe periódicamente del curso de la investigación o causa penal en la Parte requirente, en especial si se ha puesto término a la misma por cualquiera de las vías previstas en la legislación interna de este último.

Artículo 11

TRANSFERENCIA DE INFORMACION SIN PREVIA SOLICITUD

Dentro de los límites de su derecho interno, las Partes podrán comunicar a otras Partes, sin previa solicitud, aquellas informaciones obtenidas en el marco de sus propias investigaciones, que pudieran resultar útiles en la persecución de hechos delictivos comprendidos en el ámbito de aplicación de este Convenio. La transmisión de esas informaciones podrá someterse a cumplimiento de condiciones de confidencialidad.

Artículo 12

AMPLIACIÓN DEL ÁMBITO DE APLICACIÓN

Las Partes se comprometen a estudiar la ampliación del ámbito de aplicación del presente Convenio a otras modalidades delictivas.

Artículo 13

AUTORIDADES CENTRALES Y PUNTOS DE CONTACTO

1. Las Partes, al depositar el instrumento de ratificación o adhesión del presente Convenio, comunicarán la designación de la Autoridad Central y Punto de Contacto a la Secretaría de la Conferencia de Ministros de Justicia Iberoamericanos, la cual lo pondrá en conocimiento de las demás Partes.
2. La Autoridad Central y el Punto de Contacto podrán sustituirse en cualquier momento, debiendo la Parte comunicarlo, en el menor tiempo posible, a la Secretaría de la Conferencia de Ministros de Justicia Iberoamericanos, a fin de que ponga en conocimiento de las demás Partes el cambio efectuado.

Artículo 14

SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Las controversias que surjan respecto del alcance, interpretación y aplicación del presente Convenio se solucionarán mediante consultas entre las Autoridades Centrales, negociaciones diplomáticas o cualquier otro mecanismo que se acuerde entre las Partes.

Artículo 15

ÁMBITO GEOGRÁFICO

El presente Instrumento se aplicará en el ámbito de los Estados que lo ratifiquen, quedando abierto a la adhesión de otros Estados.

Artículo 16

RATIFICACIÓN

El presente Convenio será ratificado por cada uno de los Estados signatarios de acuerdo con sus respectivas normas constitucionales.

Artículo 17

ENTRADA EN VIGOR

1. El presente Convenio tendrá una duración indefinida y entrará en vigor a los treinta (30) días del depósito del tercer instrumento de Ratificación.
2. Para cada uno de los Estados que ratifiquen el presente Convenio, o se adhieran a él después de haberse depositado el tercer instrumento de ratificación, entrará en vigor a los treinta (30) días del depósito de sus respectivos instrumentos de ratificación o adhesión.
3. El presente Convenio será de aplicación a la actos de cooperación jurídica que se hayan iniciado con posterioridad a la fecha en que entre en vigor entre las Partes.

Artículo 18

RESERVAS

1. Las Partes podrán, en el momento de la firma del presente Convenio o del depósito de su Instrumento de Ratificación o Adhesión, formular alguna reserva con respecto a una o varias disposiciones determinadas del mismo.

2. Toda Parte que hubiere formulado alguna reserva se compromete a retirarla tan pronto como lo permitieren las circunstancias. La retirada de reservas se hará por notificación dirigida al Secretario General de la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos, quien inmediatamente después lo comunicará a todas las Partes del Convenio.

3. La Parte que hubiere formulado alguna reserva con respecto a una disposición del Convenio no podrá pretender la aplicación de dicha disposición por otra Parte más que en la medida en que ella misma la hubiere aceptado.

Artículo 19

DEPOSITARIO

1. El presente Convenio y los instrumentos de ratificación o adhesión, así como las declaraciones y reservas, serán depositados en la Secretaría de la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos.

2. El depositario dará publicidad al estado de las ratificaciones y de las adhesiones, las declaraciones y las reservas, así como a cualquier otra notificación relativa al presente Convenio.

3. La Secretaría de la COMJIB cuidará especialmente de dar a conocer las autoridades centrales y puntos de contacto designados a efectos del artículo 13 del presente Convenio.

4. El Secretario General de la COMJIB enviará copia, debidamente autenticada, del presente Convenio a los Estados signatarios.

Artículo 20

DENUNCIA

1. Cualquiera de las Partes podrá denunciar el presente Convenio mediante notificación escrita al depositario, quien comunicará la misma al resto de las Partes.

2. Las denuncias del presente Convenio producirán sus efectos a los seis meses de su notificación. No obstante, sus disposiciones se seguirán aplicando a aquellas actuaciones en ejecución hasta que las mismas finalicen.

3. Este Convenio continuará en vigor en tanto permanezcan vinculados al mismo al menos tres de las Partes.

Hecho en Madrid, el día 28 de mayo del 2014, en dos originales, en los idiomas español y portugués, siendo ambos textos igualmente auténticos.



Por la República de Guatemala



Por la República de Portugal



Por la República de Nicaragua



Por la República de Uruguay



Por la República de Perú

**CONVENÇÃO IBERO-AMERICANA DE COOPERAÇÃO SOBRE
INVESTIGAÇÃO, CONSERVAÇÃO E OBTENÇÃO DE PROVAS EM MATÉRIA
DE CIBERCRIMINALIDADE**

Os Estados membros da Conferência dos Ministros da Justiça dos Países Ibero-americanos (COMJIB), doravante designados como as Partes:

VISTO o artigo 3.º, alínea c), do Tratado constitutivo da Conferência dos Ministros da Justiça dos Países Ibero-americanos, de 7 de outubro de 1992;

RECORDANDO os valiosos intercâmbios técnicos e político-criminais que tiveram lugar no quadro do Seminário Ibero-americano sobre Cibercriminalidade realizado nos dias 6 e 7 de setembro de 2011 na cidade de Buenos Aires; na reunião do grupo de trabalho sobre “Criminalidade Organizada Transnacional e Cooperação Judiciária Internacional”, de 8 e 9 de setembro de 2011 na mesma cidade; nos seminários celebrados em Montevideo entre os dias 17 e 19 de setembro de 2012, e em Madrid entre 4 e 6 de fevereiro de 2013; na reunião de coordenadores que teve lugar em Bogotá a 4 e 5 de março de 2013, e no seminário realizado em Lima nos dias 24, 25 e 26 de junho de 2013.

TENDO PRESENTE que na Comissão Delegada da COMJIB celebrada no Rio de Janeiro no dia 23 de março de 2012 foi aprovada uma importante “Declaração sobre a Cibercriminalidade” na qual se acordou: “apoiar os primeiros passos dados na linha de luta contra a criminalidade organizada para dar início ao debate sobre a elaboração e assinatura de um documento internacional ibero-americano, capaz de dar resposta às necessidades acima referidas, e impulsionar a alteração das legislações penais de uma forma harmonizada”, razão pela qual foram definidas linhas gerais “de forma a concretizar um projeto de Convenção Ibero-americana para regular a Cibercriminalidade”.

ATENDENDO que, na sessão plenária que teve lugar em Viña del Mar, foi acordado, relativamente ao projeto produzido, elaborar uma Convenção Ibero-americana sobre cooperação, prova, jurisdição e competência em matéria de cibercriminalidade, bem como uma recomendação que reuniria os princípios relativos aos aspetos substantivos que deveriam ser acomodados nas legislações nacionais.

SALIENTANDO que em Viña del Mar se acordou, também, convocar um seminário para acabar “de definir o conteúdo final” dos dois documentos atrás referidos, com o objetivo de levar, para a sua assinatura, os referidos textos à Cimeira Ibero-americana de Chefes de Estado e de Governo celebrada no Panamá em outubro de 2013, o que não foi possível.

CONSIDERANDO que boa parte das legislações penais ibero-americanas devem avançar de forma coordenada para alcançar um desenvolvimento suficiente que permita enfrentar com garantias a luta contra a cibercriminalidade.

CONVENCIDOS de que todos os esforços para a prevenção e a luta contra a cibercriminalidade são necessários.

ENTENDENDO que o presente instrumento deve estar aberto a futuros desenvolvimentos e ampliação a novos crimes e mecanismos de cooperação.

MANIFESTANDO a vontade de o presente instrumento ser compatível com outros análogos, bem como com reconhecidas boas práticas no âmbito internacional.

MANTENDO o propósito de estabelecer critérios mínimos e comuns na prevenção e na luta contra a cibercriminalidade, e sem menosprezar os progressos alcançados nos respectivos ordenamentos jurídicos bem como as obrigações internacionalmente assumidas por cada Estado.

Acordaram no seguinte:

Artigo 1.º

OBJETO E ÂMBITO DE APLICAÇÃO

A presente convenção tem por objeto reforçar a cooperação mútua entre as Partes para a adoção de medidas de conservação e de obtenção de provas para a luta contra a cibercriminalidade.

Artigo 2.º
DEFINIÇÕES

Para efeitos da presente convenção:

1. Por “cibercriminalidade”, entende-se qualquer forma de criminalidade praticada no âmbito da interação social definida pela utilização das tecnologias de informação e de comunicação.
2. Por “apreensão e depósito de sistemas informáticos ou suportes de armazenamento de dados”, entende-se a sua apropriação física e a sua conservação pelas autoridades.
3. Por “selagem, bloqueio e proibição de utilização de sistemas informáticos ou de suportes de armazenamento de dados”, entende-se o seu bloqueio absoluto ou a impossibilidade da sua utilização, incluindo o congelamento de sistemas virtuais.
4. Por “requerimento de preservação imediata de dados que se encontram em poder de terceiros”, entende-se a imposição a particulares ou a entidades públicas ou privadas do dever de conservação integral de informação digital que tenham em seu poder ou sobre a qual tenham capacidade de disposição.
5. Por “cópia de dados”, entende-se a reprodução exata da informação digital recolhida por particulares, entidades públicas ou privadas.
6. Por “interceção de comunicações através das tecnologias da informação e de comunicação”, entende-se a captação em tempo real do conteúdo das referidas comunicações sem a sua interrupção, bem como dos dados de tráfego anexos.
7. Por “obtenção de dados de tráfego”, entende-se a captação das informações relativas à origem, destino, percurso, hora, data, tamanho e duração de uma comunicação eletrónica em tempo real e durante a sua realização.
8. Por “acesso a sistemas de informação”, entende-se a entrada nos referidos sistemas, incluindo os acessos remotos.
9. Por “acesso à informação contida num dispositivo que permita o armazenamento de dados”, entende-se a extração da informação contida no referido dispositivo.
10. Por “entrega de dados e arquivos informáticos”, entende-se a transferência de informações e documentos em formato eletrónico que estejam em poder de particulares, entidades públicas ou privadas.

Artigo 3.º

PRINCÍPIO DE COOPERAÇÃO MÚTUA

1. No âmbito de aplicação da presente convenção, as Partes comprometem-se a cumprir os pedidos de cooperação apresentados por outra ou outras Partes.

2. A Parte requerida poderá recusar-se a cumprir, total ou parcialmente, o pedido de cooperação quando:

- a) O seu cumprimento possa causar grave prejuízo a uma investigação ou a um julgamento em curso.
- b) Os factos que fundamentam o pedido de cooperação tenham sido já julgados ou arquivados de forma definitiva nesta Parte .
- c) O cumprimento da atividade de cooperação seja contrário ao seu direito interno.
- d) Entender que são afetados a sua soberania, segurança, ordem pública ou outro interesse essencial.
- e) O pedido se referir a uma infração que a Parte requerida considera de natureza política ou conexas com uma informação de natureza política.
- f) A conduta em causa não seja considerada uma infração penal no seu ordenamento jurídico.
- g) Sejam violados os termos da presente convenção.

3. A Parte requerida deverá fundamentar detalhadamente a sua recusa em cumprir o pedido de cooperação. Esta resposta pode ser feita de forma reservada ou, se for o caso, limitada, quando se considere que uma explicação mais detalhada pode colocar em grave risco a investigação ou o julgamento em curso, sem prejuízo de o fundamento ser posteriormente completado.



Artigo 4.º

RESPEITO DOS DIREITOS HUMANOS

No pedido ou na execução de atividades de cooperação, as Partes devem ser absolutamente respeitadoras dos direitos fundamentais das pessoas, nos termos previstos nos tratados e convenções internacionais sobre Direitos Humanos.

Artigo 5.º

ATIVIDADES DE COOPERAÇÃO

1. Quando, no decurso da investigação ou do julgamento de um crime abrangido pelo âmbito de aplicação da presente convenção, as autoridades competentes de uma Parte considerem necessária a adoção de alguma das medidas de conservação da prova ou a realização de alguma das diligências de investigação referidas nos artigos 6.º e 7.º dentro do território de outra Parte, podem solicitar às autoridades competentes desta última a sua realização de acordo com o procedimento estabelecido na presente convenção.

2. As Partes comprometem-se a impulsionar as iniciativas legislativas e outras que sejam necessárias para regular nos seus ordenamentos internos as atuações referidas nos artigos 6.º e 7.º.

Artigo 6.º

MEDIDAS DE CONSERVAÇÃO

Sem prejuízo de quaisquer outras medidas de conservação que possam contribuir para a perseguição eficaz dos crimes abrangidos pelo âmbito de aplicação da presente convenção, podem ser solicitadas as seguintes medidas específicas:

1. A apreensão e o depósito de sistemas informáticos ou de suportes de armazenamento de dados.
2. O selar, bloquear e proibir a utilização de sistemas informáticos ou de suportes de armazenamento de dados.
3. O requerimento de preservação imediata de dados que se encontrem em poder de terceiros.
4. A cópia de dados.

Artigo 7.º

DILIGÊNCIAS DE INVESTIGAÇÃO

Sem prejuízo de quaisquer outras diligências de investigação que possam contribuir para a perseguição eficaz dos crimes abrangidos pelo âmbito de aplicação da presente convenção, podem ser solicitadas as seguintes diligências específicas:

1. A intercepção de comunicações através das tecnologias de informação e de comunicação.
2. A obtenção de dados de tráfego.
3. O acesso a sistemas de informação.
4. Acesso à informação contida num dispositivo que permita o armazenamento de dados.
5. A entrega de dados e arquivos informáticos.

Artigo 8.º

AUTORIDADES CENTRAIS

1. Cada uma das Partes designa uma Autoridade Central que encaminhará os pedidos de cooperação.
2. Em particular, compete à Autoridade Central:
 - a) Receber e verificar a regularidade formal e a legalidade dos pedidos de cooperação de outras Partes, e remetê-los às autoridades competentes para cumprimento dentro do seu Estado.
 - b) Receber e verificar a regularidade formal e a legalidade dos pedidos de cooperação nacionais, e remetê-los à Autoridade Central da Parte correspondente, competente para o seu cumprimento.
3. As Partes designam e garantem o funcionamento contínuo de, pelo menos, um ponto de contato, disponível todos os dias do ano e durante as 24 horas do dia.

Artigo 9.º

PEDIDOS DE COOPERAÇÃO

1. Os pedidos de cooperação devem conter as seguintes informações:
 - a) Identificação da autoridade que apresenta o pedido e a da Parte destinatária do mesmo.
 - b) Descrição pormenorizada dos factos que estão a ser investigados ou submetidos a julgamento.
 - c) A eventual qualificação jurídica, com identificação das disposições que possam ter sido violadas de acordo com a legislação da Parte requerente.
 - d) A medida de conservação ou a diligência de investigação que é solicitada e o seu fundamento.
 - e) Se necessário, as condições concretas em que deve realizar-se a medida de conservação ou a diligência de investigação solicitada, para que tenha validade na Parte requerente.
2. As comunicações são efetuadas através de qualquer meio seguro que permita registar o seu envio e a receção integral e na língua da Parte requerida.
3. Por razões de urgência, o requerente pode dirigir-se diretamente aos pontos de contato, formalizando um pedido resumido, que deve ser completado no prazo improrrogável de 48 horas.
4. Previamente à formalização do pedido, a autoridade requerente poderá promover, através da sua Autoridade Central, consultas à Parte requerida sobre a existência de requisitos específicos exigidos pelo seu direito interno para o cumprimento do pedido.
5. As Partes podem utilizar qualquer canal para a troca de informação para facilitar a cooperação no quadro desta convenção, em particular a IberRede.

Artigo 10.º

PROCEDIMENTO PARA A TRAMITAÇÃO DOS PEDIDOS DE COOPERAÇÃO

1. Com o fim de verificar a regularidade formal e a legalidade do pedido de cooperação, as Autoridades Centrais devem dar cumprimento aos requisitos materiais e processuais estabelecidos na presente convenção, bem como às normas de direito interno.
2. A Autoridade Central da Parte requerida deve verificar a regularidade formal e a legalidade do pedido e adotar uma das seguintes decisões:
 - a) Recusar de forma fundamentada, total ou parcialmente, o pedido quando contenha um erro irreparável ou quando, por qualquer outra causa, não seja possível o seu cumprimento de acordo com a presente convenção ou com o ordenamento jurídico da Parte requerida.
 - b) Devolver o pedido, de forma fundamentada, quando contenha um erro irreparável, concedendo ao requerente um prazo para a sua correção.
 - c) Admitir o pedido, remetendo-o à autoridade competente para a sua execução.
 - d) Admitir o pedido com a condição de que:
 - (i) Seja preservada a confidencialidade da informação ou de intervenções interessadas, se o pedido não puder ser respondido sem esta reserva.
 - (ii) Não ser feita uma utilização dos resultados obtidos em investigações ou procedimentos diferentes dos indicados no pedido.
3. Se o requerente não aceitar as condições de cumprimento, a Autoridade Central da Parte requerida pode recusar o pedido.
4. Os resultados obtidos, se existirem, são remetidos à Parte requerente através da sua Autoridade Central. Se nesse momento forem conhecidas as condições de confidencialidade e de exclusividade de utilização previstas no n.º 2, alínea d) deste artigo, deve informar-se a Autoridade Central requerente, para que manifeste se as aceita. Caso não as aceite, a Autoridade Central da Parte requerida pode recusar a remessa dos resultados.

5. A Parte requerida pode solicitar que seja periodicamente informada sobre o andamento da investigação ou do processo penal na Parte requerente, em particular se as mesmas tiverem sido concluídas por qualquer uma das vias previstas na legislação interna desta última.

Artigo 11.º

TRANSFERÊNCIA DE INFORMAÇÃO SEM PRÉVIA SOLICITAÇÃO

Dentro dos limites dos seus direitos internos, as Partes podem comunicar a outras Partes, sem prévia solicitação, as informações obtidas no quadro das suas próprias investigações, que possam ser úteis na perseguição de factos ilícitos abrangidos pelo âmbito de aplicação da presente convenção. A transmissão destas informações pode estar submetida ao cumprimento de condições de confidencialidade.

Artigo 12.º

AMPLIAÇÃO DO ÂMBITO DE APLICAÇÃO

As Partes comprometem-se a estudar a ampliação do âmbito de aplicação da presente convenção a outros tipos criminais.

Artigo 13.º

AUTORIDADES CENTRAIS E PONTOS DE CONTATO

1. Ao depositarem o instrumento de ratificação ou de adesão à presente convenção, as Partes comunicarão a designação da Autoridade Central e do Ponto de Contato à Secretaria da Conferência dos Ministros da Justiça Ibero-americanos, que dará conhecimento às demais Partes.

2. A Autoridade Central e o Ponto de Contato podem ser substituídos em qualquer momento, devendo a Parte comunicar a substituição, o mais depressa possível, à Secretaria da Conferência dos Ministros da Justiça Ibero-americanos, para que esta comunique às demais Partes a alteração efetuada.



Artigo 14.º

SOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIAS

As controvérsias que surjam sobre o âmbito, a interpretação e a aplicação da presente convenção são resolvidas através de consultas entre as Autoridades Centrais, negociações diplomáticas ou qualquer outro mecanismo que seja acordado entre as Partes.

Artigo 15.º

ÂMBITO GEOGRÁFICO

O presente instrumento será aplicado no âmbito dos Estados que o ratifiquem, ficando aberto à adesão de outros Estados.

Artigo 16.º

RATIFICAÇÃO

A presente convenção será ratificada por cada um dos Estados signatários de acordo com as respetivas normas constitucionais.

Artigo 17.º

ENTRADA EM VIGOR

1. A presente convenção tem duração indefinida e entra em vigor trinta (30) dias após o depósito do terceiro instrumento de ratificação.
2. Para cada um dos Estados que ratifiquem a presente convenção, ou que a ela adiram após ter sido depositado o terceiro instrumento de ratificação, entra em vigor trinta (30) dias após o depósito dos respetivos instrumentos de ratificação ou de adesão.
3. A presente convenção aplica-se aos atos de cooperação judiciária que se tenham iniciado após a data em que entre em vigor entre as Partes.

Artigo 18.º

RESERVAS

1. As Partes podem, no momento da assinatura da presente convenção ou do depósito do seu instrumento de ratificação ou de adesão, formular uma reserva em relação a uma ou várias disposições da mesma.
2. Qualquer Parte que tenha formulado uma reserva compromete-se a retirá-la assim que as circunstâncias o permitam. A retirada de reservas deve ser feita através de notificação dirigida ao Secretário-Geral da Conferência dos Ministros da Justiça Ibero-americanos, que a deve comunicar imediatamente depois a todas as Partes na convenção.
3. A Parte que tenha formulado uma reserva relativamente a uma disposição da convenção não pode pretender a aplicação dessa disposição por outra Parte mais do que na medida em que ele própria a tivesse aceite.

Artigo 19.º

DEPOSITÁRIO

1. A presente convenção e os instrumentos de ratificação ou de adesão, bem como as declarações e reservas, são depositados na Secretaria da Conferência dos Ministros da Justiça dos Países Ibero-americanos.
2. O depositário torna público o estado das ratificações e das adesões, as declarações e as reservas, bem como qualquer outra notificação relativa à presente convenção.
3. A Secretaria da COMJIB deve especialmente dar a conhecer as autoridades centrais e os pontos de contato designados para os efeitos do artigo 13.º da presente convenção.
4. O Secretário-Geral da COMJIB enviará uma cópia, devidamente autenticada, da presente convenção aos Estados signatários.

Artigo 20.º
DENÚNCIA

1. Qualquer das Partes pode denunciar a presente convenção, através de notificação escrita ao depositário, que comunicará essa denúncia às restantes Partes.
2. As denúncias da presente convenção produzem efeitos seis meses após a sua notificação. Não obstante, as suas disposições continuam a ser aplicadas às atuações em execução até que as mesmas sejam terminadas.
3. A convenção continua em vigor enquanto permanecerem vinculados pela mesma pelo menos três das Partes.

Feita em Madrid, no dia 28 de maio de 2014, em dois originais, nas línguas espanhola e portuguesa, sendo ambos os textos igualmente autênticos.



Pela República da Guatemala



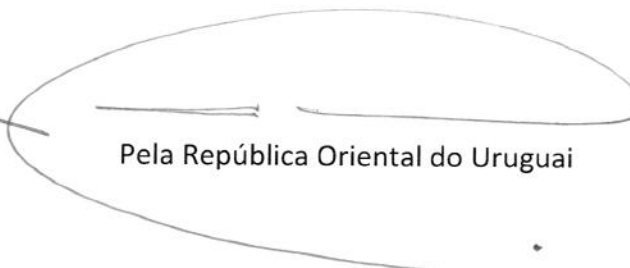
Pela República Portuguesa



Pela República de Nicaragua



Pela República do Perú



Pela República Oriental do Uruguai